

El genocidio iraquí

Carla Fibla

Periodista. Experta en Información Internacional y Países del Sur.

Irak vive un embargo impuesto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que en agosto cumplirá diez años. Los efectos del limitado acceso a recursos básicos, como alimentos o medicinas han convertido a la población en la principal víctima de las sanciones.

Tras la invasión de Kuwait (1990) y la posterior Guerra del Golfo, el país se vió sometido a la restricción de sus exportaciones e importaciones, y obligado a pagar los daños ocasionados durante el conflicto. El producto interior bruto de Irak ha pasado de 3.508 dólares per capita en 1990 a 725 dólares en 1997; el año pasado el desempleo se situaba en el 40% y la inflación en el 140%. Pero el retroceso global del país queda patente en que, según la ONU, el 50% de la población vive bajo el umbral de la pobreza (con menos de 9 dólares al mes) y los indicadores sanitarios que establecen el IDH (índice de desarrollo humano) han obligado al país a pasar del lugar 91 de 1991 al 125 (España ocupa el puesto 23).

Que Irak haya pasado de ser un país con un desarrollo medio a ocupar el puesto 42 de los 77 países más pobres del mundo se debe al deterioro interno de las infraestructuras y las nulas posibilidades de autoabastecimiento. Desde el acceso al agua potable que se ha reducido al 50% de los que se disponía en 1990 en las zonas urbanas y al 33% en las rurales, a los cortes diarios de suministro de energía eléctrica por las averías sin posibilidad de ser reparadas de las centrales eléctricas, o al aumento del índice de fracaso escolar cuando en 1987 el índice de alfabetismo alcanzaba el 80% (porcentaje que en 1995 había descendido al 58%).

Los actuales casi 25 millones de iraquíes padecen el descenso de la esperanza de vida de los 66 años en 1989 a 57, cinco años después y que sigue bajando. Los informes de las delegaciones de la ONU sobre el terreno aseguran que el de-

terioro general ya ha provocado la pérdida de una generación en Irak.

Y tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura (FAO) aseguran que la situación sanitaria de Irak es crítica.

La mortalidad en mayores de 5 años ha sufrido un incremento de 50.000 muertes más al año, en comparación con 1989; siendo las principales causas de defunción: cardiopatías, hipertensión arterial, diabetes *mellitus*, enfermedades renales, enfermedades hepáticas y tumores malignos. Según un informe elaborado por un equipo de médicos españoles enviados a Bagdad con la Campaña por el Levantamiento de las Sanciones a Irak* en marzo de este año, «a estos datos hay que añadir una infra notificación de las defunciones, ya que teniendo en cuenta los problemas de suministros de alimentos por los que está pasando el país, notificar una defunción supone la retirada de la cartilla de racionamiento»**.

Infecciones respiratorias (han aumentado un 50% los casos), diarreas y malnutrición son las principales causas de que la mortalidad infantil haya aumentado en 40.000 muertes por año de media, desde 1989. Dos tercios de éstas se producen en *periodo* neonatal, y las actuales tasas de mortalidad infantil apuntan a 100 por cada 1.000 nacidos y 130 en menores de cinco años.

Los informes de Unicef respaldan que la muerte de los niños está asociada a las consecuencias del embargo, porque se trata de enfermedades curables que no reciben la atención sanitaria adecuada por escasez de recursos (medicamentos), la red de saneamiento público es insuficiente y la población no puede afrontar las tasas económicas que se están pidiendo en los hospitales para cualquier intervención o tratamiento, a pesar de no estar seguros de que puedan suministrarlos. En el caso de las madres, el Ministerio de Sanidad iraquí asegura que se ha pasado de 117/100.000 muertes en 1989 a 294/100.000 en 1999. Y no hay que olvidar que uno de cada ocho partos es complicado, pero que sólo un tercio se derivan a los hospitales porque la atención en los centros pú-

*La Campaña de Levantamiento de las Sanciones a Irak la forman tres organizaciones no gubernamentales (Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Caum y Sur) y un partido político (Izquierda Unida)

**Informe de evaluación sanitaria de Irak, marzo 2000.

blicos cuesta 9.000 dinares (un médico gana de 3.000 a 10.000 dinares y un kilo de carne cuesta 3.000 dinares). El 16% de las madres presenta cuadros de malnutrición crónica y el 60% de las gestantes anemia, por lo que el 24% de los recién nacidos suelen nacer con un peso muy bajo, de alrededor de 2,5 kilos.

El Gobierno iraquí está enfrentándose con enfermedades derivadas de la falta de proteínas como el kwashiorkor o el marasmo que desde 1990 han multiplicado por 60 y 50, respectivamente, sus casos. No hay que olvidar que hasta enero de 1999 la cartilla de racionamiento de alimentos (que tiene 2.000 kilocalorías por persona y día, sin distinciones) no podía proporcionar proteínas animales, teniendo que conformarse con las adicionales (queso y leche).

En 1995, la FAO hizo público un informe en el que anunciaba los debastados resultados del embargo hasta esa fecha: el porcentaje de niños de bajo peso al nacer de Irak es similar al de Ghana o Mali, el retraso de crecimiento igual al de Sri Lanka y el Congo, el debilitamiento (peso con relación a la edad) como el estimado en Madagascar y Birmania, y el debilitamiento agudo igual al que vive el norte de Sudán. Estas aproximaciones permiten concluir que la situación nutricional de los niños de Bagdad equivale a la de los países en vías de desarrollo del África Subsahariana.

Pero Irak tenía un sistema sanitario bien organizado, en el que existía la colaboración internacional (Organización Mundial de Salud y Unicef) en la financiación de campañas de vacunación y prevención. En la actualidad, las deficiencias en la red de potabilización de las aguas y las limitaciones para la higiene personal han provocado el rebrote de enfermedades como el cólera (en 1998 se habían notificado 2.560 casos) y la fiebre tifoidea.

La escasa información que transmiten los medios de comunicación occidentales sobre la situación de deterioro que vive Irak ha hecho que incluso se ignore que en la actualidad el sur del país (sobre todo la región de Basora) es bombardeada casi a diario por aviones estadounidenses y británicos. Sin entrar en las razones políticas y militares de estos enfrentamientos, ni en el supuesto período de reconocimiento y control de la zona en el que se encuentra el país para que algún día la ONU permita el levantamiento del embargo, es importante señalar las consecuencias de los proyectiles revestidos con uranio empobrecido que se utilizaron durante la Guerra del Golfo y que podrían seguir empleándose -recientemente se ha sabido que se utilizaron en la Guerra de Yugoslavia (1996) y en la de los Balcanes (1999).

El uranio empobrecido es un residuo de la producción del combustible destinado a reactores nucleares y bombas atómicas. Según datos del Pentágono, Estados Unidos tiene almacenadas 500.000 toneladas de uranio empobrecido, un material tan denso que puede perforar el acero blindado y edificios, y pirofórico (se inflama al alcanzar su objetivo y pro-

voca su explosión). Siegwart-Horst Günther, médico y presidente de la Cruz Amarilla internacional ha estudiado durante cinco años los efectos de estos proyectiles sobre la población iraquí. Sus conclusiones apuntan a un aumento de enfermedades infecciosas por inmunodeficiencias severas, la aparición de herpes masivos (especialmente herpes zoster), aumento de síndromes similares al SIDA, la aparición de una enfermedad desconocida causada por disfunciones hepáticas y renales, leucemia, anemia aplásica y tumores malignos. Este especialista ofrece un apartado especial a las deformaciones producidas por defectos genéticos que también se han observado en los animales. El cuadro clínico descrito en estos casos es idéntico al que se analizó en la descendencia de algunos soldados estadounidenses y británicos que lucharon en la Guerra del Golfo.

La preocupación por las consecuencias del uranio empobrecido hizo que en 1993 un grupo de tres científicos estadounidenses estudiaran la situación. En su informe se reconoce la muerte de 50.000 niños iraquíes durante los primeros ocho meses posteriores a la guerra como consecuencia de los efectos perjudiciales de los proyectiles lanzados en la zona, y que el peligro del uranio empobrecido permanece durante 350 años sobre la tierra.

La crisis humanitaria que vive Irak se refleja en el enfrentamiento que viven las delegaciones sobre el terreno y los que toman las decisiones desde Nueva York. En septiembre de 1998 dimitió Denis Halliday, el responsable en la zona con 30 años de experiencia en Naciones Unidas, porque «el precio que se le está haciendo pagar a Irak es inaceptablemente alto dada la inutilidad de las sanciones». Este mismo año también dejó su cargo el sucesor de Halliday, Hans von Sponeck, quien declaró: «Dimito con la esperanza de que mi cargo sea ocupado por alguien que crea que el futuro traerá una mejora en la situación humanitaria para este país. Yo, por el momento, no lo veo en absoluto». Y la alemana Jutta Burghart, representante de la FAO en Irak, renunció a su puesto para protestar por las consecuencias que la organización había comprobado que producía el bloqueo sobre el sociedad civil.

El programa «humanitario» de la ONU para Irak denominado «Petróleo por alimentos» es el principal obstáculo que observan los que analizan la situación de la población. Sponeck anunció ante la prensa internacional en marzo de este año que el programa era «inadecuado» porque: la cantidad que se le permite exportar al país en crudo para así adquirir productos humanitarios es de 2,9 mil millones de dólares (lo que supone 252 dólares por iraquí) que sitúa a Irak como uno de los países menos desarrollados del planeta a pesar de disponer de las segundas reservas petroleras del mundo, además el «embargo intelectual» que se está haciendo al sector educativo (que recibe el 4% del presupuesto del programa) supondrá que una generación carezca de la formación básica para el futuro. Y por último, las dilaciones administrativas y el bloqueo ejercido por EE.UU. y Gran Bretaña en la apro-

bación de los contratos* presentados por el gobierno iraquí (el pasado mes de noviembre menos del 10% de lo solicitado y aprobado había entrado en Irak).

Las restricciones han hecho que en casi diez años el presupuesto de los servicios sanitarios se haya reducido un 70%, no hay fondos para la compra de medicamentos, para mantener los centros de salud, ni para los salarios de médicos y enfermeras. Esto ha provocado un creciente mercado negro al que sólo puede acceder un porcentaje muy reducido de la población, y el desarrollo de las consultas privadas en las que los médicos encuentran el sustento real para seguir adelante.

Parece imposible que hace sólo nueve años la Organización Mundial de la Salud elogiase el sistema sanitario iraquí porque ofrecía una cobertura de aproximadamente el 97% de la población urbana y el 78% de los habitantes de la zona rural. Antes del bloqueo los gastos en salud pública suponían el 0,8% del Producto Nacional Bruto, era un servicio público accesible económicamente y existía una organizada regionalización de los recursos con los diferentes niveles asistenciales (centros de salud de atención primaria y secunda-

ria). Pero la realidad actual es que los hospitales están al 50% de su capacidad porque se ha fomentado la práctica privada, se sustituye a profesionales por personal menos cualificado (utilizando a las familias, sobre todo a la madre, como enfermera) y se han introducido tasas por la utilización de ciertos servicios, intervenciones quirúrgicas o partos para obtener fondos que permitan mantener el centro y ofrecer salarios al personal.

En enero del año pasado el ex responsable de la ONU en Irak Denis Halliday utilizó la palabra «genocidio» para describir las pérdidas humanas que supone el embargo económico a Irak, unos meses más tarde repetía esta palabra en Madrid** para recordar que el Fiscal General de Estados Unidos, Ramsay Clark, así como un grupo de parlamentarios críticos con la política de sanciones del gobierno laborista también la estaban empleando. Mientras el secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan, asegura que en Irak se está llevando a cabo una «intervención humanitaria», en este país castigado mueren al día 250 personas*** como consecuencia directa del embargo.

*Los contratos son informes en los que el Gobierno iraquí especifica las necesidades básicas de la población para que se permita su compra con dinero iraquí.

***Dominación económica y militar en el nuevo orden mundial. Madrid, 20 y 21 de noviembre de 1999. Editado por la Campaña Estatal por el Levantamiento de la Sanciones a Irak, febrero de 2000.*

****Unicef. Situation analysis of children and women in Iraq. 30 de abril de 1998.*